

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 30 SEP 2020

Auto Interlocutorio nro. _____

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-017-2017-0084-01
DEMANDANTE:	KAROL ADRIANA RODRÍGUEZ MOSQUERA Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN-MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO QUE NIEGA DECRETO DE PRUEBAS.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 699 del 11 de octubre de 2019 proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Cali en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, a través del cual, negó el decretó de una prueba pericial solicitada.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Karol Adriana Rodríguez Mosquera y otros demandaron a la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, por los daños materiales y morales sufridos por los demandantes como consecuencia de las lesiones padecidas por Karol Adriana Rodríguez Mosquera en hechos ocurridos el 18 de febrero de 2015 por un arma de dotación oficial.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Una vez el Juzgado Diecisiete Administrativo de Cali dio lectura al auto nro. 698 del 11 de octubre de 2019, el apoderado judicial de la parte demandada manifestó entre otros aspectos, su inconformidad frente a la prueba documental aportada por el apoderado judicial de la parte demandante y mencionada en el punto 5.1.19 de la demanda, relacionada con la "Vainilla de tiro de marca "LAPUA" "9MM" "BR SHORT". Al respecto expuso que *"dado que esta no ha sido una prueba bien recolectada, es decir la Fiscalía en su momento la que debió haber aportado en cadena de custodia que nos consta que es la veracidad de esta prueba, no es el medio idóneo para que tengamos la veracidad sobre esta determinada vainilla y no se resolvió el debido proceso como tal que es la entidad encargada..."*

El juzgado Diecisiete Administrativo de Cali mediante auto interlocutorio nro. 699 del 11 de octubre de 2019 modificó el auto interlocutorio nro. 698 y procedió a negar el decretó de la prueba solicitada por el apoderado judicial de la parte demandante, encaminada a enviar la vainilla aportada en la demanda al laboratorio de balística del cuerpo de

investigación seccional de Cali adscrito a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de identificar la clase de arma utilizada en el disparo y demás características.

Al respecto expuso: *"que efectivamente el elemento consistente en una vainilla para efectos de la validez jurídica de la misma efectivamente debería corresponder al proceso penal y no ante la presentación ante el proceso contencioso administrativo, por tal razón a través del auto nro. 699 modifica y acepta el pedimento efectuado por la Policía Nacional en el sentido de que la vainilla aportada con la demanda en realidad hace parte del proceso penal correspondiente, sobre los hechos que dieron origen a esta demanda, en consecuencia, el Despacho revoca la decisión de remitir la vainilla aportada con la demanda al laboratorio de balística del cuerpo de investigación seccional Cali adscrito a la Fiscalía General de la Nación"*.

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra el auto nro. 699 del 11 de octubre de 2019 proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Cali, argumentado (min:30:56):

"... si bien, la vainilla que se aportó no fue recogida o embalada como lo manifiesta el apoderado de la Policía Nacional, esto fue en razón a que tal y como se probará en la demanda y también como en los hechos se esgrime no acudió a ningún ente investigativo el día de los hechos, al igual que la policía después de los hechos, entonces la única medida que le tocó o que les quedó a los pobladores a los que presenciaron el hecho pues fue recoger los restos de los disparos que en su momento realizaron los policiales, en ese orden de ideas tal como se esgrime en los hechos esa vainilla la recoge la señora Solanyer Sánchez Hurtado y se la entrega a uno de los demandantes en ese orden de ideas, pues de alguna manera, si bien no se tiene esa capacidad, o no se está facultado para hacer pues de alguna manera se está realizando un debido proceso con relación a esa prueba y para eso se llama a la señora Solanyer Sánchez Hurtado "... entonces, se considera por esta parte que al negar el decreto de esta prueba se estaría incurriendo en una violación al debido proceso, máxime cuando esa prueba, la vainilla, se iba a enviar a la entidad técnica a efectos de que se realizara el estudio y objeto de la prueba..."

V. CONSIDERACIONES:

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

***Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:**
(...)

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.*

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

Corresponde a este Despacho determinar si es pertinente, conducente y útil la prueba solicitada por el apoderado judicial de la parte demandante en el acápite 5.5.1, encaminada a que se envíe al laboratorio de balística del cuerpo de investigación seccional de Cali adscrito a la Fiscalía General de la Nación, la vainilla aportada con la demanda y relacionada en el punto número 5.1.19 del libelo demandatorio.

5.3 TESIS DEL DESPACHO

El Despacho confirmará la decisión de primera instancia, en atención a que el dictamen pericial que solicitó el apoderado judicial de la parte demandante no es posible decretarlo en razón a que la prueba recolectada no se hizo por las autoridades correspondientes y de conformidad con la cadena de custodia reglada por la norma penal.

5.4 GENERALIDADES DE LA PRUEBA

Para establecer la pertinencia, conducencia y procedencia de las pruebas solicitadas, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 167, 168 y 169 del Código General del Proceso, los cuales son del siguiente tenor:

Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
“(...)”

Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Artículo 169. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. “(...)”.

El Consejo de Estado (2019)¹ definió el concepto de pertinencia, contundencia, utilidad y licitud en los siguientes términos:

Atendiendo a que, conforme con el criterio jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en las providencias citadas *supra*, para analizar si una prueba es legalmente prohibida o ineficaz, o si versa sobre hechos notoriamente impertinentes o es manifiestamente superflua, se debe verificar si cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud.

Conforme a la jurisprudencia señalada *supra*, se considera que para verificar: i) la pertinencia de una prueba se debe revisar que el hecho que se pretende probar guarde relación con el objeto del proceso; ii) la conducencia de una prueba se debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho, para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con

¹ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de diciembre de 2019, radicación nro. 11001-03-24-000-2011-00056-00.



él se pretende probar²; iii) la **utilidad** de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba³; y iv) la **licitud** de la prueba se debe revisar que no haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales⁴.

Ahora bien, el artículo 212 del CPACA manifiesta que las pruebas pueden ser aparecidas por el juzgador, cuando son solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso dentro del término y oportunidad señalados. De manera textual dispone:

"Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas" (...)

El Consejo de Estado (2019)⁵ recalcó, que el precitado artículo prevé las oportunidades en que las pruebas deben ser aportadas o solicitadas, así:

Asimismo, el artículo 212⁶ del CPACA, prevé que las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas en primera instancia corresponden a: la presentación de la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, según el caso concreto.

Por su parte el artículo 218 del CPACA, establece:

"La prueba pericial se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, salvo en lo que de manera expresa disponga este Código sobre la materia.

El juez excepcionalmente podrá prescindir de la lista de auxiliares de la justicia y designar expertos idóneos para la realización del dictamen pericial, cuando la complejidad de los asuntos materia del dictamen así lo amerite o ante la ausencia en las mismas de un perito o por la falta de aceptación de este".

A su vez, el artículo 219 ibidem dicta:

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia de 11 de abril de 2018. M.P. Eugenio Fernández Carlier, número único de radicación 43533. "[...] en la jurisprudencia se ha distinguido desde hace tiempo entre prueba ilegal y prueba ilícita, división con la que se alude, en el primer caso, a aquellas que padecen yerros en las formas propias de ordenación, práctica y/o incorporación a la actuación (debido proceso probatorio), y en el segundo, a aquellas obtenidas, en general, con desconocimiento de las garantías fundamentales de las personas, por ejemplo, por violación de los derechos a la no autoincriminación, a la solidaridad íntima, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. [...]".

⁵ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de noviembre de 2019, Radicación número: 25000-23-37-000-2018-02035-01.

"Las partes, en la oportunidad establecida en este Código, podrán aportar dictámenes emitidos por instituciones o profesionales especializados e idóneos. Para tal efecto, al emitir su dictamen, los expertos deberán manifestar bajo juramento, que se entiende prestado por la firma del mismo, que no se encuentran incurso en las causales de impedimento para actuar como peritos en el respectivo proceso, que aceptan el régimen jurídico de responsabilidad como auxiliares de la justicia, que tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen, indicando las razones técnicas, de idoneidad y experiencia que sustenten dicha afirmación, y que han actuado leal y fielmente en el desempeño de su labor, con objetividad e imparcialidad, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Señalarán los documentos con base en los cuales rinden su dictamen y de no obrar en el expediente, de ser posible, los allegarán como anexo de este y el juramento comprenderá la afirmación de que todos los fundamentos del mismo son ciertos y fueron verificados personalmente por el perito". (...)

De la norma transcrita se desprende que en primera instancia los dictámenes periciales pueden ser incorporados por la parte demandante con la demanda y la reforma de la misma, sin embargo, no previó la posibilidad de ser allegados ni en el transcurso de la audiencia inicial regulada por el artículo 180 del CPACA, pues en dicho momento procesal el juez debe decretar las pruebas oportunamente pedidas por las partes en las oportunidades procesales que el inciso 2 del artículo 212 menciona taxativamente.

5.3. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320⁷ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁸ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

A su turno, el artículo 328 ibidem dispone entre otros aspectos que: *"el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley"*.

Del tenor literal de la norma en cita, concluye el Despacho que la voluntad del legislador es que, en virtud del recurso de apelación el superior estudie y revise la decisión proferida por el *a quo*, pero con una característica especial, y es que dicha instancia se limita a aquellos precisos cargos expuestos por el recurrente al sustentar su inconformidad, los cuales, se encuentran limitados, en virtud de la congruencia, a lo decidido por el juez en primera instancia.

El Juzgado Diecisiete Administrativo de Cali en el transcurso de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, profirió el auto nro. 698 del 11 de octubre de 2019 a través del cual, decretó la prueba pericial solicitada en el numeral 5.5.1 de la demanda, sin embargo, una vez se corrió traslado a las partes de dicho proveído, el apoderado

⁷ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.

⁸ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

judicial de la parte demandada objeto la decisión argumentando que la vainilla recogida en el lugar de los hechos no fue debidamente recolectada, pues no fue puesta en cadena de custodia por la Fiscalía en su momento.

En virtud del requerimiento, el Juzgado Diecisiete profirió el auto nro. 699 del 11 de octubre de 2019 por el que modificó el auto nro. 698 de esa misma fecha, en el sentido de negar la prueba pericial encaminada a enviar la vainilla aportada y enunciada en el numeral 5.1.19 de la demanda al laboratorio de balística del cuerpo de investigación seccional Cali adscrito a la Fiscalía General de la Nación.

Contra dicha decisión, el apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación y reitero la importancia de dicha prueba, ya que si bien, fue recogida sin la presencia de miembros de algún cuerpo investigativo, lo cierto es que, ese día no compareció ninguno y en consecuencia fue recolectada por uno de los habitantes del sector que la entregó a uno de los familiares de la afectada. Agregó que negar esta prueba generaría una vulneración al debido proceso, más aún que dicha pieza procesal va a ser enviada a una entidad técnica.

Sobre la carga de la prueba de quien imputa al Estado la causación de un perjuicio por el uso de armas de dotación oficial, el Consejo de Estado⁹ ha determinado:

"Por regla general, el Estado debe responder por los daños causados con armas de fuego de sus agentes estatales en ejercicio de sus funciones, en virtud de que su utilización genera un riesgo para la sociedad. Para su indemnización la parte demandante debe demostrar la existencia del daño y la causalidad, siendo suficiente probar que el daño fue causado por un agente estatal con un arma de dotación oficial. Al derivarse la responsabilidad simplemente de la creación de un riesgo, el Estado solo puede exonerarse de responsabilidad a través de la prueba de la existencia de una causa extraña o, lo que es lo mismo, acreditando que el daño sufrido fue generado en realidad, y de manera exclusiva, por la propia víctima, por un tercero o por un evento constitutivo de fuerza mayor..." (subrayado fuera del texto).

Visto lo anterior, observa el despacho que cuando se solicita la indemnización de perjuicios ocasionados presuntamente por un arma de dotación oficial, corresponde al demandante demostrar la existencia de un daño y su causalidad.

En el presente asunto, el apoderado judicial de la parte demandante relató cómo hechos que, el día 18 de febrero de 2015 cuando la joven Karol Adriana Rodríguez Mosquera se encontraba en una tienda ubicada en la carrera 28G con 72 del barrio el poblado, fue impactada en su humanidad presuntamente por un arma de dotación oficial perteneciente a la Policía Nacional que en el momento estaba restableciendo el orden quebrantado por un presunto hurto y evitando que la comunidad hiciera justicia por sus propias manos.

Argumentó que en el lugar de los hechos fue recogida por la señora Solanyer Sánchez Hurtado una vainilla¹⁰ de tiro marcada "LUPA" "9MM" "BR SHORT", la cual fue entregada

⁹ Acción tercera, Subsección B, sentencia del 4 de diciembre de 2019, radicación número 63001-23-31-000-2010-00064-01(51953).

¹⁰[https://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho_\(armas_de_fuego\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho_(armas_de_fuego)) "Un cartucho es un conjunto formado por un recipiente metálico, de papel o plástico llamado vaina o casquillo, la bala, la pólvora y el fulminante. Esto último en

a uno de los familiares de la afectada¹¹.

Para probar estos hechos, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó como pruebas las siguientes¹²:

"Prueba documental aportada

*"...
5.1.19 Vainilla de tiro marcada así "LAPUA" "9MM" "BR SHORT", la cual fue recogida en el lugar y hora de los hechos objeto de esta demanda por la señora SOLANYER SANCHEZ HURTADO y entregada a la señora MARTHA LUCIA ZULUAGA MOSQUERA madre de la joven KAROL RODRÍGUEZ MOSQUERA.*

*"...
5.5PRUEBA PERICIAL O POR INFORME*

*"...
"5.5.1 solicito se envíe la vainilla aportada con esta demanda y enunciada en el numeral 5.1.19 al laboratorio de balística del cuerpo de investigación seccional Cali adscrito a la Fiscalía General de la Nación ubicada en la calle 25 N #6A-11 piso 8 de Cali, con el objeto de identificar la clase de arma utilizada en su disparo y demás características que se puedan extraer de la misma y que sirvan al proceso, y de ser posible se defina por quien fue distribuida y a que entidad fue distribuida".*

En el transcurso de la audiencia inicial celebrada el 11 de octubre de 2019 el Juzgado Diecisiete fijó el litigio¹³ en el sentido de establecer, si se estructura la responsabilidad administrativa de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional por las lesiones causadas a la joven Karol Adriana Rodríguez Mosquera por un proyectil de arma accionada en medio de un operativo policial.

Revisados los requisitos de la prueba y realizado un resumen del caso objeto de estudio, lo primero que debe decir el Despacho es que el juez de primera instancia no negó el decreto de la prueba por impertinente, inconducente o inútil, sino porque la validez del elemento material probatorio (vainilla) allegado al plenario corresponde al proceso penal y no al contencioso administrativo, por lo cual la vainilla debió ser parte del proceso penal que dio origen a esta demanda.

Respecto a lo anterior, tenemos que decir que la balística es una ciencia forense propia del proceso penal que mezcla procesos físicos y químicos para poder determinar la procedencia de los proyectiles de las armas de fuego, por ejemplo, se suelen hacer procesos de donde se estudian las heridas y trayectorias del cuerpo, se establece si en el cuerpo hay presencia de anillo de contusión, quemaduras, tatuaje y si en el proceso de disparo se dejan residuos de pólvora, etc. La balística, por lo tanto, juega un papel fundamental en el desarrollo del proceso penal, ya que de los datos obtenidos a través de ella no dejan duda alguna sobre la conducta cometida y sobre quienes cometieron los hechos, advirtiendo claro está, que debe ser objeto de una adecuada cadena de custodia

cuanto a los cartuchos metálicos. Los cartuchos semimetálicos (de escopeta), cuando cargan perdigones o postas, alojan un taco entre la pólvora y las municiones".

¹¹ Folio 1-97

¹² Folio 6-7.

¹³ Folio 18

Sobre la cadena de custodia, el Código de Procedimiento Penal, en su capítulo V, Libro II, desarrolla el procedimiento así:

1. Se inicia en el lugar donde se descubren, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios (art. 254), donde el servidor público encargado de la indagación o investigación lo identifica, comprueba su estado original, lo recolecta, lo embala, lo rotula y da inicio a su custodia (arts. 257-254-255).
2. El funcionario de policía judicial que recolectó la evidencia física la traslada al laboratorio correspondiente y asegura el recibo del material ante el funcionario competente (art. 258).
3. Ya dentro del laboratorio el material probatorio es entregado al perito que corresponda según la especialidad (art. 259).
4. El perito dejará constancia del estado en que se encuentra la evidencia, realizará sus investigaciones y análisis y enviará a la mayor prontitud posible el informe pericial al fiscal correspondiente (art. 260).
5. El elemento material o sus remanentes serán preservados en el almacén destinado para ese laboratorio, continuando con la custodia hasta que sean requeridos o dispuestos por orden de autoridad judicial (art. 262).

De lo anterior se deduce que, la vainilla o casquillo obtenida por la parte demandante y aportada al plenario no puede ser tenida en cuenta a efectos de ser objeto de dictamen pericial, atendiendo a que no se puede determinar la legalidad del medio de prueba ofrecido para su admisión, toda vez que no fue recaudada por la autoridad competente y puesta en conocimiento dentro de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 23 Delegada contra los policiales involucrados en los hechos por el delito de lesiones personales contra la humanidad de Karol Adriana Rodríguez Mosquera. En esa medida, no es posible entonces acceder a remitir la vainilla aportada a la demanda al laboratorio de balística del CTI para que realicen la experticia solicitada por la parte demandante.

Sin embargo, es preciso decirle a la parte que la negativa no constituye vulneración al debido proceso, en el sentido que, dentro del proceso se encuentran otros medios probatorios con los cuales se pueda estudiar si la imputabilidad del daño se le atribuye a la administración.

En consecuencia, no encuentra el Despacho razones para revocar la decisión del a quo de negar el dictamen pericial solicitado en el acápite 5.5.1 de la demanda y por consiguiente, se impone la confirmación de la misma.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto nro. 699 del 11 de octubre de 2019 proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó la prueba pericial solicitada por el apoderado judicial de la parte demandante en el acápite número 5.51 de la demanda, en consecuencia:

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2017-00084-01
: REPARACIÓN DIRECTA
: KAROL ADRIANA RODRÍGUEZ MOSQUERA Y OTROS
: NACIÓN-MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL

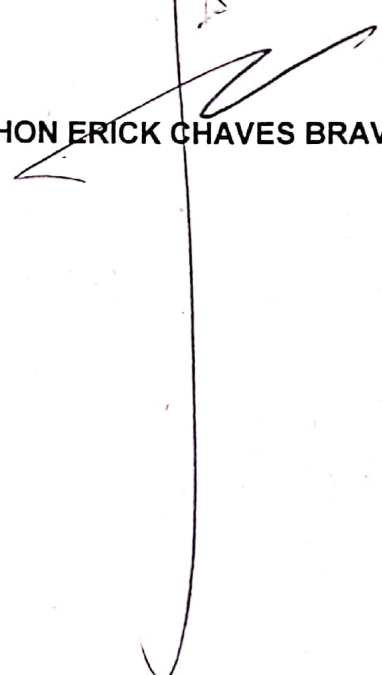


9

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

El magistrado,


JHON ERICK CHAVES BRAVO

Nathali Guarin
Vo.Bo Secretario